

Santander, Bucaramanga.

República de Colombia  
Comité seccional Santander  
Consejo Nacional de técnicos electricistas

**RESOLUCIÓN 019 DE 2021**

( 26 JUL 2021 )

**“Por la cual se decide la preclusión de la investigación disciplinaria, y por lo cual se ordena el cierre definitivo y archivo del expediente no. 007-2018”**

Expediente Proceso No:	007-2018
Disciplinado:	JOSE TOBIAS ORDUZ ROJAS
Quejoso(s):	YILMERT YESIT GONZALEZ VEGA
Fecha Queja:	22 de junio de 2018
Asunto:	RESOLUCIÓN DE PRECLUSIÓN

El comité disciplinario del seccional, de conformidad con la facultad establecida en el artículo 80 de la Ley 1264 de 2008, procede a decidir si existe mérito formular cargos o declarar la terminación del Proceso Disciplinario No. **007-2018**, adelantado en contra del señor técnico electricista **JOSE TOBIAS ORDUZ ROJAS**.

**ANTECEDENTES**

**I. HECHOS RELEVANTES**

1. El 22 de junio de 2018 el señor **YILMERT YESIT GONZALEZ VEGA** presento queja (folio 1) contra **JOSE TOBIAS ORDUZ ROJAS** identificado con cedula de ciudadanía N° 91458651 mediante el cual denuncia un presunto pago de dinero por obra eléctrica, instalación de contadores, de lo cual al parecer no realizo nada.
2. Según el quejoso acordó la prestación del servicio de obra eléctrica **JOSE TOBIAS ORDUZ ROJAS** consistente en instalación de caja de 6 contadores, para la casa 3 barrio luz de salvación, por la peatonal 2 y para lo cual le pago la suma de \$1.500.000 sin hacer nada.

**II. TRAMITE PROCESAL**

1. Auto averiguación preliminar (Folio 2).
2. Incorporación, certificado matricula profesional de técnico electricista. (Folio 3).

**Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE**  
**Comité Seccional Santander**

✉ seccional.santander@conte.org.co 🌐 www.santander.conte.org.co

☎ (57+7) 6424260 Ext. 101-102

📍 Calle 36 # 17 - 56 Oficina 3-8 Centro Comercial Omnicentro - Código postal: 680006

📍 Bucaramanga, COLOMBIA

Nit. 800155559-2

3. Incorporación, formulario de solicitud matricula profesional **JOSE TOBIAS ORDUZ ROJAS** (Folio 4).
4. Citación versión libre al investigado (Folio 5 y 6).
5. Citación ampliación de denuncia al quejoso (Folio 7 y 8).
6. Reiteración citación ampliación de denuncia al quejoso (Folio 7 y 8).
7. Auto apertura formal de investigación. (Folio 19 y 20).
8. Citación notificación auto investigación formal y versión libre al investigado (Folio 21 y 22).
9. Requerimiento de elementos de pruebas quejoso (24 y 25.)

### III. PRUEBAS RECAUDADAS

Obran en el expediente disciplinario los siguientes medios probatorios relevantes:

1. Queja del señor YILMERT YESIT GONZALEZ VEGA (Folio 1).
2. Certificación matricula profesional de técnico electricista señor JOSE TOBIAS ORDUZ ROJAS (Folio 3).
3. Formulario de solicitud matricula profesional JOSE TOBIAS ORDUZ ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° 91458651 (Folio 4).

### CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Procede este despacho a analizar el mérito de la acción disciplinaria y evaluar el material probatorio existente en el presente expediente, para determinar si de la queja presentada se puede establecer la existencia de alguna conducta que pueda considerarse disciplinable y la probabilidad de responsabilidad del técnico investigado.

### IV. CAUSAS DE PRECLUSIÓN

El artículo 80 de la Ley 1264 de 2008 establece que se podrá dictar resolución de preclusión cuando aparezca demostrado que:

- ✓ la conducta no ha existido o
- ✓ que no es constitutiva de falta disciplinaria;
- ✓ que el técnico electricista investigado no la ha cometido o
- ✓ que el proceso no puede iniciarse por muerte del investigado,
- ✓ prescripción de la acción o
- ✓ cosa juzgada disciplinaria.

La declaración de preclusión trae como consecuencia la terminación del proceso disciplinario, es una decisión de fondo que pone fin a la actuación.

En materia disciplinaria se requiere certeza de existencia la falta y la responsabilidad del investigado, se presume la inocencia hasta no demostrarse lo contrario, y las dudas favorecen al investigado (in dubio pro disciplinado) dando lugar a su absolución.

La corte constitucional fue bastante explicita en el reconocimiento de los anteriores derechos y principios, recordando que cobijan el debido proceso disciplinario y en la sentencia C- 495 de 2019 que se debe tener en cuenta explico lo siguiente:

*D. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DEBER DE RESOLVER LAS DUDAS RAZONABLES EN FAVOR DEL INVESTIGADO*



27. Como elemento característico de los sistemas políticos democráticos y de manera congruente con instrumentos internacionales ratificados por Colombia, la Constitución Política de 1991 estableció en su artículo 29 la presunción de inocencia, como una de las garantías del derecho fundamental al debido proceso. Se trata de una cautela constitucional contra la arbitrariedad pública, que se activa en todos aquellos eventos en los que el Estado pretenda ejercer el poder de reprochar comportamientos, por la vía judicial o administrativa, esencialmente en ejercicio de su facultad sancionadora (*ius puniendi*)<sup>[19]</sup>.

28. A pesar de que la norma constitucional disponga que "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable", en una redacción equivalente a la del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la prevista en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>[20]</sup>, ambos ratificados por Colombia<sup>[21]</sup>, la presunción de inocencia es una garantía fundamental que es igualmente exigible en los procedimientos administrativos<sup>[22]</sup>, como lo reconoce expresamente el inciso primero del artículo 29 de la Constitución colombiana y que entraña las siguientes consecuencias: (i) corresponde al Estado la carga de desvirtuar la inocencia, a través de la prueba de los distintos elementos de la responsabilidad, incluida la culpabilidad<sup>[23]</sup>. (ii) A pesar de existir libertad respecto de las pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia, sólo son admisibles medios de prueba respetuosos del debido proceso y acordes a la dignidad humana<sup>[24]</sup>. (iii) Nadie puede ser obligado a contribuir para que la presunción de inocencia que lo ampara, sea desvirtuada y sus silencios carecen de valor probatorio en forma de confesión o indicio de su responsabilidad<sup>[25]</sup>; (iv) durante el desarrollo del proceso o del procedimiento, la persona tiene derecho a ser tratada como inocente<sup>[26]</sup> y (v) la prueba necesaria para demostrar la culpabilidad debe tener suficiente fuerza demostrativa, más allá de toda duda razonable, la que, en caso de persistir, debe resolverse mediante la confirmación de la presunción. Las anteriores, son "garantías constitucionales que presiden la potestad sancionadora de la administración y el procedimiento administrativo que se adelanta para ejercerla"<sup>[27]</sup>.

29. La regla que ordena resolver las dudas razonables en favor del investigado (regla *in dubio pro reo*, *in dubio pro administrado*, *in dubio pro disciplinado*) es una consecuencia natural de la presunción constitucional de inocencia y constituye la contracara misma de la carga de la prueba que pesa sobre el Estado, a través de las entidades que ejercen el poder público. Así, no obstante que la norma constitucional no exija expresamente que las dudas razonables sean resueltas en beneficio de la persona investigada, se trata de una conclusión forzosa que resulta de constatar que, a pesar de los esfuerzos demostrados durante el desarrollo del procedimiento y en desarrollo del deber de instrucción integral, el Estado no cumplió la carga probatoria que le incumbía y, por lo tanto, no logró recaudar o aportar pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Por lo tanto, la regla "en caso de duda, resuélvase en favor del investigado", no es más que la confirmación de que la persona nunca ha dejado de ser inocente y, en el caso de sanciones de naturaleza administrativa, la no aplicación de esta regla, genera nulidad del acto administrativo<sup>[28]</sup>. Aunque la jurisprudencia constitucional haya precisado que, en tratándose de procedimientos administrativos, la presunción de inocencia no es un derecho absoluto<sup>[29]</sup> y se haya admitido, de manera excepcional, que el Legislador invierta la carga de la prueba de uno de los elementos de la responsabilidad, (el elemento subjetivo), a través de la previsión de presunciones de dolo y de culpa<sup>[30]</sup>, dichas medidas han sido sometidas al cumplimiento de rigurosas condiciones<sup>[31]</sup> y, en todo caso, se ha advertido que esta posibilidad se encuentra excluida para ciertos procesos, en particular, el proceso disciplinario, en donde debe operar plenamente la presunción de inocencia.

30. Las dudas que implican la decisión de archivo del asunto<sup>[32]</sup> o que conducen a proferir un fallo absolutorio, son las razonables u objetivas, es decir, aquellas que luego del desarrollo de la instrucción, surgen de un análisis conjunto de las pruebas obrantes en el expediente, presidido por la sana crítica y la experiencia. La duda razonable resulta cuando



del examen probatorio no es posible tener convicción racional respecto de los elementos de la responsabilidad y, por lo tanto, no se cuenta con las pruebas requeridas para proferir una decisión condenatoria, que desvirtúe plenamente la presunción de inocencia<sup>[33]</sup>. Es decir que las dudas irrazonables, subjetivas o que se fundan en elementos extraprocesales, no permiten proferir una resolución favorable, cuando los elementos de la responsabilidad se encuentren debidamente probados en el expediente<sup>[34]</sup>. La certeza o convicción racional equivale a un estándar probatorio denominado de convicción más allá de toda duda razonable<sup>[35]</sup> por lo que, para poder ejercer el poder punitivo del Estado, no se requiere la certeza absoluta<sup>[36]</sup>, sino que las pruebas válidamente recaudadas demuestren la reunión de los elementos de la responsabilidad y, al respecto, no existan dudas derivadas de la insuficiencia probatoria o de contradicciones probatorias insuperables a partir del examen conjunto del expediente.

31. En lo disciplinario, el Legislador ha previsto tanto la presunción de inocencia, como su consecuencia lógica: la regla de resolución de las dudas en beneficio del investigado<sup>[37]</sup>. Así, aunque antes de 1995 se trataba de una aplicación analógica de las reglas procesales penales, el Código Disciplinario Único contenido en la Ley 200 de 1995 dispuso en su artículo 6: "Resolución de la duda. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá en favor del disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla". Esta norma fue demandada ante este tribunal, porque, para el accionante, dicha regla desconocía la presunción de inocencia, ya que si la persona se presume inocente, no es posible dudar al respecto y declarar la inocencia por la presencia de dudas<sup>[38]</sup>. Mediante la sentencia C-244 de 1996, se declaró la exequibilidad de dicha norma, luego de concluir que "no entiende la Corte cómo se pueda vulnerar la presunción de inocencia cuando se ordena a la autoridad administrativa competente para investigar a un determinado funcionario público que en caso de duda sobre la responsabilidad del disciplinado ésta ha de resolverse en su favor. Y, por el contrario, advierte que de no procederse en esa forma sí se produciría la violación de tal presunción, pues si los hechos que constituyen una infracción administrativa no están debidamente probados en el expediente, o no conducen a un grado de certeza que permita concluir que el investigado es responsable, mal podría declararse culpable a quien no se le ha podido demostrar la autoría o participación en la conducta antijurídica"<sup>[39]</sup>.

32. Con un contenido equivalente a la regla prevista en la Ley 200 de 1995, el Código Disciplinario Único actualmente vigente (Ley 734 de 2002) dispuso en su artículo 9: "Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. ¶ Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla", es decir, de superar la duda. Esta norma se compagina con el artículo 128 del mismo Código, cuyo aparte final prevé que "La carga de la prueba corresponde al Estado" y con el artículo 142, según el cual "No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado", norma equivalente al artículo 118 del Código anterior, Ley 200 de 1995.

33. En suma, presumir la inocencia de quien está siendo investigado por una autoridad estatal, es una de las garantías constitucionales del derecho fundamental al debido proceso. Esta garantía es aplicable a los procesos judiciales sancionatorios, como el penal y el disciplinario de la jurisdicción disciplinaria y a los procedimientos administrativos que pueden conducir a condenas o a sanciones administrativas, incluidas, entre otras, las sanciones disciplinarias proferidas por autoridades administrativas, como la Procuraduría General de la Nación y las oficinas de control interno disciplinario. De la presunción de inocencia se derivan, entre otras consecuencias, que corresponde al Estado la carga de probar los elementos de la responsabilidad y, por lo tanto, ante el incumplimiento de dicha carga, por ausencia, contradicción objetiva o insuficiencia de pruebas, la consecuencia natural de presumir la inocencia, consiste en que las dudas razonables deben resolverse en favor del investigado. Esta regla resulta de concluir que no fue posible desvirtuar la



*presunción de inocencia, porque no se logró llegar a una convicción racional de la responsabilidad, desprovista de dudas razonables, es decir, aquellas que objetivamente surjan del análisis y cotejo de las pruebas obrantes en el expediente. Así, aunque excepcionalmente en materias diferentes a lo disciplinario, resulte.*

Así mismo el artículo 88 de la ley 1264 de 2008 en su parágrafo primero expresa:

a) Ordenar el archivo definitivo de las diligencias, por considerar que se encuentra presente ante una cualquiera de las causales eximentes de la responsabilidad de que trata el Código de Procedimiento Penal;

Igualmente, el artículo 90 de este código de ética de los técnicos electricistas dispone:

ARTÍCULO 90. En lo no previsto en la presente ley, se aplicarán en su orden las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal, del Código Único Disciplinario y las del Código Contencioso Administrativo, en cuanto no sean incompatibles con las aquí previstas

De la lectura de las anteriores normas se desprende que se debe remitir al código de procedimiento penal en primer lugar para complementar y llenar los vacíos que se presentan.

La obra procesal penal también hace una lista de causales para proceder con la preclusión a tener en cuenta de manera extensiva, ya que todas ellas impactan el mérito para continuar con la acusación y están relacionadas con límites a la facultad sancionatoria, garantía del debido proceso, no son incompatibles con el proceso disciplinario.

Es así como el título vi de la ley 906 de 2004 hace alusión a la preclusión y en su artículo 332 establece las causales a saber:

ARTÍCULO 332. CAUSALES. *El fiscal* solicitará la preclusión en los siguientes casos:

1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.
2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.
3. Inexistencia del hecho investigado.
4. Atipicidad del hecho investigado.
5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.
7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del este código.

La ley 734 de 2002 código disciplinario único dentro sus principios rectores también dispone en su artículo 9:

Artículo 9°. Presunción de inocencia. A quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado.

Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla.

## V. ANALISIS Y VALORACIÓN PROBATORIA

De manera preliminar, prima facie, sale al descubierto, que no se aportaron pruebas por el quejoso más allá de sus afirmaciones en la queja, a pesar de haberse intentado su ampliación de queja y requerido aportar mayores elementos de prueba no sucedió, el material probatorio obrante no resulta suficiente para determinar la existencia de la falta y responsabilidad del implicado.



La situación mencionada impide que se pueda continuar con el proceso disciplinario, más aún obliga a precluirlo, la orfandad probatoria es contundente.

No hay pruebas que sostengan las actuaciones irregulares, aprovechamientos indebidos alegados, y conlleven al convencimiento más allá de toda duda razonable la existencia, y comisión de los hechos.

No ha habido manera de comprobar los hechos y conducta denunciados.

Los hechos afirmados comportan ausencias ineludibles, como que no haya siquiera demostración de los pagos realizados, facturas de materiales, cotizaciones, alcance del contrato, saldos, evidencia de la obra, ejecución, deficiencias, en fin, carga de pruebas de las que no es posible relevarse y que para la hora de ahora son exiguas, además que no se vislumbra probabilidad remota de incorporarlas o suplirlas.

## VI. CONFIGURACIÓN DE LA PRECLUSIÓN

Examinado con detenimiento el acontecer procesal completo, revisados los supuestos facticos y jurídicos, las bases de datos pertinentes, agotadas las actividades investigativas, transcurrido tiempo ímprobo, resulta forzoso precluir la presente investigación disciplinaria.

Existen grandes falencias de prueba que no son posibles de superar, para determinar una falta disciplinaria y así mismo determinar que el investigado fuera responsable de infringir sus deberes éticos en los hechos denunciados, con lo que se puede probar, no se logra verificar de manera fehaciente las circunstancias fácticas relevantes, tampoco se logra desvirtuar la presunción de inocencia.

No hay merito para continuar, la fuerza demostrativa de los hechos que se requiere no está acreditada, no se pudo constatar al menos en el grado necesario las circunstancias y conducta del investigado.

Por lo que este despacho no denota, ni evidencia una presunta ocurrencia de falta disciplinaria, ni el grado de certeza de la responsabilidad de la misma, en relación con el técnico electricista investigado, siendo estas dos premisas necesarias y requisitos indispensables para proferir un fallo sancionatorio, lo anterior acorde a lo establecido en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, norma en cita que establece lo siguiente:

*“Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.”*

No escapa a la vista de esta corporación que el investigado no se hizo presente directamente en el proceso en ningún momento, pero ello nada influye en esta decisión, que le resulta favorable.

En mérito de lo expuesto, en Bucaramanga, el comité disciplinario del comité seccional de Santander del CONTE,

## VII. RESUELVE

**PRIMERO: DECRETAR la PRECLUSIÓN** y por ende **DECLARAR** la terminación del presente proceso Disciplinario, y como consecuencia de ello, ordenar el archivo definitivo

de la Investigación Disciplinaria No. 007-2018, adelantado en contra del señor técnico electricista **JOSE TOBIAS ORDUZ ROJAS** identificado con cedula de ciudadanía N° 91458651 con matrícula profesional N°91458651-55639, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

**SEGUNDO:** COMUNICAR la presente decisión a los sujetos procesales incluyendo al quejoso, informándole que procede el recurso de apelación ante el CONTE nacional el cual debe ser presentado y sustentado en el término de 10 días hábiles.

Dada a los, 26 JUL 2021

Notifíquese y cúmplase.



**FERNANDO RODRIGUEZ-VELANDIA**  
Consejero Comité seccional de Santander



**GERARDO DE JESUS ISAZA OSTOS**  
Consejero – comité seccional de Santander



**WILSON QUINTERO MURILLO**  
Consejero – presidente comité seccional de Santander

Proyecto: MARIO ANDRES BONILLA DIAZ  
Cargo: PROFESIONAL DE PROCESOS DISCIPLINARIOS